

INFORME ASESORÍA EXTERNA SENADOR JUAN ANTONIO COLOMA

SEPTIEMBRE 2024

I. MINUTA COMISIÓN HACIENDA PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO, BOLETÍN 16.316-05

I.1 ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

- i) Fecha de ingreso:** 27 de septiembre de 2023
- ii) Iniciativa:** Mensaje
- iii) Cámara de origen:** Cámara de Diputados
- iv) Trámite constitucional:** Segundo trámite constitucional, segundo trámite reglamentario, segundo informe de la Comisión de Hacienda.
- v) Normas de quórum:**
 - a) Orgánico constitucional: artículos 18 y 28, de conformidad a los artículos 8 inciso primero y 66 inciso segundo de la Constitución Política de la República (deber de cumplimiento al principio de probidad).
 - b) Calificado: artículos 19 y de conformidad a los artículos 8 inciso segundo y 66 inciso segundo de la Constitución Política de la República (reserva de información)

vi) Leyes que se relacionan con la iniciativa:

- Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- - Ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.
- - Ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- - Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
- - Código Civil.
- - Ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
- - Decreto ley N° 1263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, de Administración Financiera del Estado.
- - Ley N° 19.553, que concede asignación de modernización y otros beneficios que indica.
- - Ley N° 18.834, aprueba Estatuto Administrativo.
- - Decreto con fuerza de ley N° 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
- - Decreto ley N° 249 de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala.

vii) Informe financiero: de conformidad al informe financiero sustitutivo N° 259/26.09.2024, se establece que el proyecto y las indicaciones presentadas a este en última instancia -que consideran la eliminación del Consejo Consultivo que se creaba mediante esta ley-, implicarán un mayor gasto fiscal que considera un estimado de \$353.567 miles el primer año de aplicación, llegando a los \$338.080 miles en régimen, que se desglosan de la siguiente forma:

Tabla 1: Costo por año proyecto de ley (M\$ 2024)

Ítem	Año 1	Régimen
Gasto en personal	320.086	320.086
Bienes de Consumo	17.994	17.994
Instalación	15.487	0
Total	353.567	338.080

viii) Votaciones:

- *Primer informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (enero 2024):*
 - Votación en general: Aprobado por 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
 - Votaron por la afirmativa: E. Aedo, B. Barrera, C. Bianchi, S. Cid, M. Mellado, J. Naranjo, C. Rojas, A. Romero, J. Sáez, A. Sepúlveda, G. Von Mühlenbrock y G. Yeomans.
- *Sala de la Cámara de Diputados (enero 2024):*
 - Votación en general: Aprobado por 131 a favor, 1 en contra, 4 abstenciones.
 - Votaron por la negativa: L. Romero.
 - Votaron por la abstención: A. Celis, G. Naveillan, D. Schalper, J. Kaiser.
- *Primer informe de la Comisión de Hacienda del Senado (julio 2024):*
 - Votación en general: Aprobado por 4 a favor, 0 en contra, 1 abstenciones.
 - Votaron por la afirmativa: J.A. Coloma, J. García, J. M. Insulza, F. Kast, R. Lagos.
- *Sala del Senado (agosto 2024):*
 - Votación en general: Aprobado por 31 a favor, 4 en contra, 5 abstenciones.
 - Votaron por la negativa: J. Castro, M.J. Gatica, J. M. Insulza, A. Kuzanovic.

- Votaron por la abstención: J. M. Durana, C. Kushel, I. Moreira, D. Sandoval, E. Van Rysselberghe.

I. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto consta de 34 artículos permanentes y siete transitorios, que apuntan a establecer un mejor sistema de auditoría interna gubernamental, a través de la instauración de una nueva normativa, fortalecimiento de la institucionalidad con la creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno -nuevo organismo resultante del replanteamiento del actual Consejo de Auditoría Interna de Gobierno (CAIGG)- y la creación de un Consejo Consultivo de Auditoría Interna, y el reconocimiento legal de la Red de Auditoría Interna, todo lo anterior con la finalidad de impulsar y fortalecer dentro de la administración del Estado los procesos de gestión de riesgos, de control interno y gobernanza.

El contenido en particular de la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados se resume como sigue:

i) PÁRRAFO 1° DISPOSICIONES GENERALES

- **Artículo 1:** Crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, domiciliado en Santiago.
- **Artículo 2:** Se define el objetivo del Servicio, estableciendo que deberá contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, a través de actividades de: (i) aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, (ii) cumplimiento de las normas y procedimientos, (iii) protección de los recursos públicos y de la probidad, y (iv) ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad, siendo para ello el órgano encargado de dirigir y coordinar la Red de Auditoría Interna.

- **Artículo 3:** Se establecen los órganos a los que serán aplicables las disposiciones de esta ley, exceptuando de ella a la Contraloría General de la República, al Banco Central, al Consejo para la Transparencia, a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades, a las empresas públicas creadas por ley y a las instituciones de Educación Superior de carácter estatal, sin perjuicio de lo cual dichas instituciones podrán solicitar voluntariamente la asesoría del SAIG a través de la suscripción de uno o más convenios.
- **Artículo 4:** se establecen las definiciones necesarias para la aplicación de esta ley relativas a los conceptos de: (i) Actividades de Aseguramiento, (ii) Actividades de Asesoramiento, (iii) Auditor Interno Institucional, (iv) Auditoría Interna, (v) Control Interno, (vi) Economía, (vii) Eficacia, (viii) Eficiencia, (ix) Gestión de Riesgos, (x) Gobernanza, y (xi) Lineamientos Técnicos.
- **Artículo 5:** Se establece que el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno elaborará la Política de Auditoría General de Gobierno, instrumento que contendrá los lineamientos estratégicos de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos señalados en el artículo 3, durante un período de cinco años. Dicha Política será presentada para su aprobación por parte del Presidente de la República, debiendo considerar durante su elaboración la opinión del Consejo Consultivo de Auditoría Interna. A la mitad del periodo de vigencia de la Política el Servicio deberá revisarla y proponer su actualización al Presidente de la República, de ser necesario.
- **Artículo 6:** Se establece que los órganos a los que se aplica esta ley deberán elaborar un Plan de Auditoría Interna, individualizando cada trabajo específico que lo compone y proyectado para el periodo de un año calendario, de acuerdo con los lineamientos estratégicos definidos en la Política de Auditoría General de Gobierno. El Plan será aprobado por quien ejerza la jefatura superior del respectivo órgano, previo informe técnico vinculante del Servicio.

ii) **PÁRRAFO 2° FUNCIONES Y ATRIBUCIONES**

- **Artículo 7:** Se definen las funciones y atribuciones del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, que se resumen en:
 - Asesorar al Presidente de la República, ministros, subsecretarios y autoridades superiores de los órganos señalados en el artículo 3, en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos y proponerles normas, modelos, acciones e instrumentos que tiendan a fortalecer estas áreas en sus respectivos órganos, promoviendo la estricta observancia de la probidad administrativa y el debido uso de los recursos públicos que se les asignen para el cumplimiento de sus programas y responsabilidades institucionales. Asimismo, deberá informar a las mencionadas autoridades sobre el nivel de cumplimiento del respectivo órgano, de los requerimientos del SAIG; de la aplicación de normas, modelos y lineamientos técnicos definidos por este último; de los resultados de los trabajos de aseguramiento y asesoramiento realizados; y del nivel de implementación de recomendaciones de auditoría y/o compromisos asumidos en sus respectivos planes de auditoría interna.
 - Proponer al Presidente de la República la Política de Auditoría Interna de Gobierno, así como las modificaciones legales y reglamentarias en materias relacionadas con el ámbito de su competencia.
 - Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de aseguramiento y asesoría en los órganos señalados en el artículo 3 y revisar la correcta implementación de las recomendaciones surgidas en sus procesos de auditoría interna.
 - Realizar actividades de asesoría en los órganos señalados en el artículo 3, de forma transversal, y con especial énfasis en la revisión de la economía, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.
 - Formular, adoptar o adaptar normas técnicas para las actividades de auditoría interna que realicen los órganos a que se refiere el artículo 3 y formular modelos y lineamientos técnicos sobre la base de dichas normas técnicas.

- Asesorar técnicamente a los auditores internos institucionales y a los equipos de auditoría interna en la elaboración de los planes de auditoría interna, evaluar sus resultados, otorgar retroalimentación de éstos, e informar de ellos al Presidente de la República.
- Formular, adoptar o adaptar modelos de competencia, perfiles profesionales y programas de aseguramiento y mejora de la calidad, entre otros, en materia de auditoría interna para los órganos referidos en el artículo 3.
- Formular esquemas de formación, capacitación y certificación profesional para los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, a través de normas, modelos y lineamientos técnicos relacionados con el ámbito de sus competencias. Asimismo, podrá realizar difusión técnica en tales materias y recomendar estrategias de capacitación para dichos funcionarios.
- Contratar o convenir con personas naturales u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, la ejecución de trabajos específicos de aseguramiento y asesoramiento, y/o la realización de estudios, investigaciones y asistencia técnica.
- Solicitar a los auditores institucionales y equipos de auditoría interna la ejecución de actividades de aseguramiento y de asesoramiento específicas.
- Requerir al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, autoridades superiores de los órganos señalados en el artículo 3, a los auditores internos institucionales y/o a los equipos de auditoría interna, información general y específica en materias vinculadas a la auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos del respectivo órgano, servicio o entidad. Asimismo, deberá proporcionarles a dichas autoridades y equipos la evaluación técnica de las actividades que los respectivos órganos realizan en materia de auditoría interna.
- Velar por la coordinación y cooperación técnica entre organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en el ámbito de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

- Propiciar y promover actividades de aseguramiento y asesoramiento en materias de probidad y transparencia administrativa, en el marco de la ley y los instrumentos internacionales vigentes al respecto, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos en la materia.

Además, se establece que el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, excepcionalmente, podrá realizar auditorías, a requerimiento del Presidente de la República, en los órganos señalados en el artículo 3, salvo en los casos en que se encuentre en curso una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, en el mismo organismo y con los mismos objetivos.

- **Artículo 8:** Se establece que el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno deberá ejercer sus funciones y atribuciones en coordinación con la Contraloría General de la República, y sin perjuicio de las facultades que a ella le corresponden, en particular respecto a la dependencia técnica que ésta ejerce sobre los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 del decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República.

iii) **PÁRRAFO 3° ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA**

- **Artículo 9:** Se entrega la dirección superior, la organización y la administración del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno al Auditor General de Gobierno, quien será el jefe superior del Servicio, y que deberá contar con un título profesional o grado académico de licenciado o licenciada de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado, o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente, y acreditar una experiencia laboral en materias de auditoría interna no inferior a 10 años.

- **Artículo 10:** Se define que al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno le será aplicable lo establecido en el Título VI de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

- **Artículo 11:** Se establecen las funciones y atribuciones del Auditor General de Gobierno:
 - Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de jefe superior del Servicio.
 - Dictar los reglamentos internos y las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.
 - Ejecutar los actos y celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá adquirir, administrar y enajenar bienes de cualquier naturaleza.
 - Delegar funciones o atribuciones específicas en funcionarios o funcionarias del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, en materias de gestión interna.
 - Determinar, con sujeción a la planta y dotación máxima de personal, la estructura organizativa interna del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.
 - Rendir cuenta anualmente de su gestión al Presidente de la República, a través de una memoria o balance institucional.
 - Remitir informes trimestrales al Presidente de la República que den cuenta de los principales hallazgos y compromisos para superarlos, derivados de los trabajos realizados en los órganos señalados en el artículo 3, en las materias propias de su competencia, con el objetivo de informar respecto del funcionamiento de dichos órganos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política de Auditoría General de Gobierno y de los planes de auditoría interna de dichas instituciones. Asimismo, manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones en el cumplimiento de los objetivos

establecidos en la Política y en los planes de auditoría interna, y proponer medidas de corrección y mitigación.

- Considerar la opinión y los acuerdos del Consejo señalado en el artículo 12.

iv) **PÁRRAFO 4° DEL CONSEJO CONSULTIVO DE AUDITORÍA INTERNA**

- **Artículo 12:** Se establece la creación del Consejo Consultivo de Auditoría Interna, para asesorar al Auditor General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos y se definen sus funciones:
 - Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales y reglamentarias en materias de su competencia.
 - Asesorar oportunamente sobre las propuestas de normas, modelos, acciones e instrumentos que tiendan a fortalecer la auditoría interna, la gobernanza, el control interno y la gestión de riesgos.
 - Opinar oportuna y justificadamente sobre el contenido de la Política de Auditoría General de Gobierno, propuesta por el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

Además, se determina que las opiniones, pronunciamientos, estudios y propuestas del Consejo serán remitidos al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno y ponerse a disposición del público a través de la página web institucional del Servicio, en el plazo máximo de treinta días corridos desde dicha remisión. El Auditor General de Gobierno podrá concurrir a las sesiones del Consejo y tendrá derecho a ser oído por éste cada vez que lo estime conveniente.

- **Artículo 13:** Se fija la composición del Consejo en tres personas de vasta experiencia profesional y/o académica comprobada en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y/o gestión de riesgos, designadas por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Durarán en su cargo tres años, el que podrá prorrogarse por un período sucesivo, por una sola vez.

- **Artículo 14:** Se fija la dieta de los consejeros en dos unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de seis sesiones por año calendario, considerando tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. Dicha dieta será compatible con otros ingresos. Se agrega además el derecho a percibir un viático equivalente al que corresponda a un funcionario del grado 5 de la Escala Única de Sueldos para los integrantes del Consejo que tengan que trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a las sesiones.
- **Artículo 15:** Se define la incompatibilidad del cargo de consejero con el ejercicio de los cargos de diputado, senador, delegado presidencial regional o provincial, alcalde, concejal, gobernador regional, consejero regional, miembro del escalafón primario del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, funcionario de la Administración del Estado, funcionario del Banco Central de Chile, miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos.
- **Artículo 16:** Se establece la inhabilidad de los consejeros para prestar servicios en materias de auditoría interna, procesos de gestión de riesgos, control interno y de gobernanza a los órganos señalados en el artículo 3.
- **Artículo 17:** Se definen las causales de cesación en el cargo de consejero:
 - Expiración del período para el que fue nombrado.
 - Renuncia voluntaria.
 - Condena a pena aflictiva.
 - Incapacidad psíquica o física sobreviniente para el desempeño del cargo.
 - Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a las que se refieren los dos artículos anteriores.

- Incumplimiento grave y manifiesto de las normas sobre probidad administrativa. Se entenderá como tal el incumplimiento de las normas señaladas en el artículo 18, particularmente, el incumplimiento del deber de abstención.
 - Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Se entenderá como falta grave, entre otras, la inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un mismo año calendario, así como el incumplimiento del deber de reserva y secreto establecido en el artículo 19.
- **Artículo 18:** Se determina la aplicación a los consejeros de las normas sobre probidad administrativa establecidas en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y particularmente, el deber de abstención establecido en el artículo 12 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Además les serán aplicables las normas contenidas en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, y en particular, estarán obligados a realizar la declaración de intereses y patrimonio establecida en el Título II de dicha ley.
 - **Artículo 19:** Se establece para los consejeros el deber de absoluta reserva y secreto de la información y documentos de los que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar en conformidad a la ley.
 - **Artículo 20:** Se define que el el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno proporcionará el apoyo administrativo y de servicios al Consejo para su buen funcionamiento, así como el personal que requiera para el desarrollo de sus funciones.

- **Artículo 21:** Se establece la periodicidad semestral de sesiones del Consejo, previa citación de su Presidente. De forma extraordinaria, podrá sesionar a requerimiento del Auditor General de Gobierno.
- **Artículo 22:** Se define el quórum para sesionar del Consejo en dos de sus integrantes y adoptará sus acuerdos con el voto favorable de los asistentes. De no llegar a acuerdo cuando asistan solo dos de sus miembros, resolverán la diferencia en la sesión siguiente mediante el voto de quien estaba ausente.
- **Artículo 23:** Se deriva a reglamento la determinación de las demás normas de organización y funcionamiento del Consejo que sean necesarias.

v) PÁRRAFO 5° RED DE AUDITORÍA INTERNA

- **Artículo 24:** Se establece legalmente la Red de Auditoría Interna, que será dirigida y coordinada por el Servicio y estará conformada por los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna. Tendrá por objeto una aplicación transversal de las materias de su competencia, en los órganos señalados en el artículo 3.
- **Artículo 25:** Se establece que los órganos señalados en el artículo 3 deberán contar con una Unidad de Auditoría Interna, que incluya al menos dos funcionarios que cumplan los perfiles técnicos y modelos de competencia definidos por el Servicio y que deberá prestar servicios de aseguramiento y asesoría en materias de gobernanza, gestión de riesgos y control interno en sus respectivas instituciones.
- **Artículo 26:** Se fija la obligación para los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna de proporcionar al SAIG la información que éste estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en el plazo que éste determine.

- **Artículo 27:** Se determina el deber de los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna de desarrollar sus funciones de acuerdo a las normas, modelos, acciones y lineamientos técnicos fijados por el SAIG, y de concurrir a las reuniones y a las actividades de capacitación desarrolladas por éste. Se agrega que los auditores y los equipos de auditoría señalados no podrán asumir responsabilidades de gestión dentro de los órganos en que desempeñen sus funciones, y deberán atenerse a los lineamientos que se dicten por el Servicio u otras entidades competentes, sobre conflicto de interés y probidad.

- **Artículo 28:** Se establece que los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna deberán realizar la declaración de patrimonio e intereses establecida en el Título II de la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

vi) PÁRRAFO 6° PATRIMONIO

- **Artículo 29:** Se define la forma en que estará constituido el patrimonio del SAIG.

- **Artículo 30:** Se establece que el SAIG estará sometido al decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, y a sus disposiciones complementarias.

vii) PÁRRAFO 7° DEL PERSONAL

- **Artículo 31:** Se definen las normas estatutarias y remuneracionales aplicables al personal del SAIG.

- **Artículo 32:** Se establece que el personal del SAIG deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información y documentos de los que tome conocimiento en el

cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar en conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, en su caso, de conformidad a la ley.

viii) PÁRRAFO 8° OTRAS DISPOSICIONES

- **Artículo 33:** Se definen facultades del SAIG sobre información y manejo de datos personales, estableciendo que podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos, y pedir toda la información y documentos necesarios para la revisión de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia, incluidos datos personales. Además, podrá realizar el tratamiento de dichos datos personales con el fin de ejercer el control, coordinación y supervisión en las materias de su competencia.
- **ARTÍCULO 34:** Se establece la transferencia de las referencias que las leyes, reglamentos y demás normativa vigente hagan al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno o al CAIGG, las que se entenderán en adelante hechas al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

ix) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- **Artículo primero:** Se establecen las facultades al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, se establezca por medio de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y suscritos, además, por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias, con las restricciones que se indiquen, para:

- Fijar la planta de personal del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.
 - Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios titulares de planta y a contrata desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
 - Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije, del encasillamiento que se practique y de la iniciación de actividades del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, el cual podrá contemplar un período de implementación y otro de entrada en operaciones.
 - Disponer el traspaso, en lo que corresponda, de toda clase de bienes desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.
- **Artículo segundo:** Se faculta al Presidente de la República para conformar el primer presupuesto del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, pudiendo crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, subtítulos, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
 - **Artículo tercero:** Se define la forma de solventar el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia.
 - **Artículo cuarto:** Se fija en 180 días desde la publicación de esta ley el plazo para la dictación de su correspondiente reglamento.
 - **Artículo quinto:** Se fija en 180 días desde la publicación de la presente ley el plazo para constituir el Consejo señalado en el artículo 12, para lo cual el Consejo de Alta Dirección Pública deberá hacer las respectivas propuestas al Presidente de la República con al menos treinta días de anticipación al cumplimiento de dicho plazo.
 - **Artículo sexto:** Se establece el plazo de 180 días a contar de la constitución del Consejo señalado en el artículo 12 para la proposición al Presidente de la República de la primera versión de la Política establecida en el artículo 5.

- **Artículo séptimo:** Se establece que el artículo 34 entrará en vigencia a contar de la fecha de entrada en operaciones del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

II. COMENTARIOS SOBRE LA INICIATIVA

3.1 Sobre la iniciativa en general

Esta es una iniciativa que propone un nuevo sistema de auditoría de Gobierno que perfeccione, modernice y fortalezca los que hoy día existe. En este sentido, es importante señalar que gran parte de la nueva institucionalidad que se estaría generando, se funda en lo que ya está vigente en cuanto a personal y funcionarios, por lo que se trata de cambios más profundos en materia de normativa, funciones, atribuciones y coordinación interinstitucional.

En la práctica, lo que hace la iniciativa es que el actual Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) que está definido mediante un decreto, pasa a ser un servicio público técnico descentralizado de rango legal, definiendo sus objetivo de manera de potenciar el trabajo de coordinación, seguimiento, control y perfeccionamiento de las auditorías internas en los órganos públicos a los que se aplicará esta ley y entregándole las facultades y atribuciones legales necesarias para ello.

Considerando que esta es una materia que ha sido parte de recomendaciones internacionales para el mejoramiento de la gobernanza pública y que ellas son adecuadas en el marco de una mejor gestión y control de dicha gestión a nivel del gobierno, esta iniciativa es positiva y no implica un aumento innecesario del aparato estatal, sino que mejora la calidad de la entidad que actualmente se vincula a estas materias. En efecto, es importante señalar que se estima que es un cambio importante el hecho de que el cargo de Auditor General que ejercerá la dirección y administración de este nuevo servicio será provisto pasando por el Sistema de Alta Dirección Pública, lo que es significativo desde el punto de vista de dotar de mayor autonomía del gobierno de turno a esta entidad.

Cabe tener presente que una de las principales inquietudes en torno a esta iniciativa se ha dado respecto de los efectos que esta ley podría tener sobre las funciones que corresponden

a la Contraloría General de la República. Sin embargo, se estima que la iniciativa esta configurada de modo de evitar la superposición y favorecer la coordinación en lo que sea necesario entre el ente contralor y el nuevo servicio.

3.2 Sobre las indicaciones presentadas a la iniciativa

Durante la tramitación en particular en la Comisión de Hacienda del Senado, se presentaron dos grupos de indicaciones de parte del Ejecutivo, que recogieron parte de los comentarios y planteamientos hechos por los senadores durante el debate en general del proyecto. Asimismo, fueron presentadas indicaciones parlamentarias.

A continuación se presentan los cambios propuestos con las correspondientes observaciones a cada caso.

1.- De Su Excelencia el Presidente de la República, al artículo 3° inciso primero, para eliminar la expresión “las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública,”.

Observaciones:

En el artículo 3° se establecen los órganos del Estado a los que será aplicable la ley, así como los órganos que estarán exceptuados del sistema de auditoria propuesto. En este último caso, el proyecto señalaba a la Contraloría General de la República, al Banco Central, al Consejo para la Transparencia, a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades, a las empresas públicas creadas por ley y a las instituciones de Educación Superior de carácter estatal.

Con la indicación, el Ejecutivo propone sacar de la excepción de aplicación de esta ley a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad, lo que se consideraría

adecuado, ya que no habría razones para mantener a estas instituciones fuera del sistema que se propone.

Mientras las demás instituciones exceptuadas corresponden a órganos constitucionales autónomos o bien tienen otros mecanismos de gestión y control de auditorías, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad ya cuentan con unidades de auditoría que cumplen con los objetivos y funciones para hacerse parte del nuevo sistema.

2.- De Su Excelencia el Presidente de la República y 3.- Del Honorable Senador señor Insulza, para suprimir en el artículo 3° inciso segundo la palabra “voluntariamente”.

Observaciones:

El inciso segundo del artículo 3° establece que los órganos que quedan exceptuados de la aplicación de la ley podrán solicitar la asesoría del SAIG, lo que se concretará mediante convenios.

Las indicaciones 2 y 3 propuestas son adecuadas, ya que es redundante la expresión “voluntariamente” y puede llevar a equívocos en la interpretación de la norma.

4.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar entre la palabra “convenios” y el punto final, la siguiente frase: “, cuya copia será remitida a la Contraloría General de la República”.

Observaciones:

La indicación es adecuada con la finalidad de mejorar la coordinación del SAIG con la Contraloría General de la República.

Considerando que se está dando la posibilidad de realizar convenios de asesoría entre los órganos exceptuados de esta ley y el SAIG, es positivo que la Contraloría tenga copia de dichos convenios.

5.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar en el artículo , antes del punto final, la siguiente frase: “, de lo cual se informará a la Contraloría General de la República”.

Observaciones:

Esta indicación va en un sentido similar a la indicación 5 por lo que se sugiere que ambas sean consideradas armonizando la redacción de modo que se incluya tanto el deber de informar como de remitir copia del convenio a la Contraloría General de la República.

6.- Del Honorable Senador señor Insulza, para incorporar en el artículo 5, antes del punto y aparte, la siguiente frase: “, y de la Contraloría General de la República”.

Observaciones:

La indicación parecería razonable, pues solo considera agregar la opinión de la Contraloría General de la República, la que no sería vinculante.

Sin perjuicio de lo anterior, además de las cuestiones de admisibilidad de la indicación por tratarse de entregar una función nueva a un órgano público, no es tan clara la necesidad de que la Contraloría deba opinar respecto a la formulación de la Política de Auditoría General de Gobierno, ya que ella trata de los lineamientos estratégicos generales que deberán seguir las unidades de auditoría de cada órgano al que aplique esta ley, cuestión que no estaría dentro de los espacios de coordinación que se requieren entre el SAIG y la Contraloría.

7.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar en el encabezamiento del inciso primero del artículo 7, entre las expresiones “tendrá” y “las siguientes funciones”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo señalado en el artículo siguiente,”.

Observaciones:

El cambio que se propone en esta indicación es más bien formal, aunque sería más adecuado por técnica legislativa que este cambio se haga en el artículo 8, señalando al inicio de este: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior”.

8.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar entre la palabra “interna” y el punto final, la siguiente frase: “, instando a que se persigan las responsabilidades correspondientes en caso de inobservancia”. Y 9.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, antes del punto final, el siguiente texto: “, las que, en caso de inobservancia, generarán las sanciones administrativas respectivas”.

Observaciones:

Las indicaciones 8 y 9 van en el mismo sentido y son razonables.

Tomando en cuenta que la norma entrega al SAIG la función de coordinar, supervisar y evaluar las actividades de aseguramiento y asesoría en los órganos que están en el perímetro de esta ley, así como revisar la correcta implementación de las recomendaciones surgidas en sus procesos de auditoría interna, resulta adecuado que también pueda instar a que ante la constatación de inobservancias se hagan efectivas las responsabilidades correspondientes, de modo de promover que efectivamente se implementen las medidas derivadas de sus recomendaciones.

10.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar en la letra h) del artículo 7 el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Servicio definirá mediante resolución y previa consulta a la Contraloría General de la República un procedimiento que resguarde la debida coordinación interinstitucional.”.

Observaciones:

La indicación propuesta es adecuada, pues facilita el trabajo de coordinación que se requiere para que no haya superposición de funciones y da mayor certeza de los procedimientos a seguir.

11.- Del Honorable Senador señor Insulza, para suprimir la letra m) del artículo 7.

Observaciones:

Sería importante contar con la fundamentación de la indicación, ya que esta es una norma que habitualmente se presenta en los organismos para que puedan realizar acciones de cooperación y perfeccionamiento técnico que generalmente se realizan a fines de favorecer el desempeño e información de la entidad respectiva.

En este sentido, se puede considerar que más que suprimir la letra completa, podría revisarse la redacción de modo que se precise que este tipo de contratos o convenios se realice específicamente para fines asociados a la capacitación, realización de estudios o investigaciones, asesorías relativas a modernización, y no para derivar tareas que en la práctica son propias del servicio y no pueden derivarse.

12.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar en el inciso segundo del artículo 7, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: “Sin perjuicio de las auditorías que directamente pueda llevar a cabo el SAIG, a requerimiento del Presidente de la República, como lo establece el artículo 7 del texto, ello no será impedimento bajo ninguna circunstancia para que la Contraloría General de la República ejerza sus facultades y atribuciones en materia de auditorías e investigaciones. En el caso de encontrarse

en curso una fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, el SAIG deberá coordinarse con dicho organismo para los efectos de no duplicar esfuerzos ni recursos en las auditorías que lleve adelante. Todo lo anterior, en virtud de los principios de coordinación, eficiencia y eficacia.”.

Observaciones:

La indicación se puede entender como una complementación del inciso final del artículo 7, en el cual se señala que el SAIG, excepcionalmente, podrá realizar a requerimiento del Presidente de la República, auditorías en los órganos señalados en el artículo 3, salvo en los casos en que se encuentre en curso en el mismo organismo y con los mismos objetivos una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Así, la indicación estaría reforzando que no haya espacio para que las auditorías excepcionales señaladas interfieran con el ejercicio de facultades propias por parte de la Contraloría y se reitera el deber de establecerse la coordinación del SAIG con ella en caso de que ya esté realizando una fiscalización en el correspondiente organismo.

13.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio definirá mediante resolución y previa consulta a la Contraloría General de la República un procedimiento que resguarde la debida coordinación interinstitucional.”.

Observaciones:

Esta indicación es importante para concretar de mejor forma las funciones y atribuciones que se establecen para el SAIG en el artículo 7, pues favorece la coordinación entre las instituciones, la vinculación necesaria con la Contraloría General de la República y la disminuir del riesgo de duplicación o superposición de

auditorías, que podría obstaculizar el mejor desarrollo de dichos ejercicios de control y fiscalización.

14.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:
“En el caso de tratarse de materias reservadas, el Servicio antes de iniciar una investigación o auditoria deberá informar a la Contraloría General de la Republica.”.

Observaciones:

Esta indicación debe coordinarse con las indicaciones 12 y 13. En el fondo está ok, pero puede ser redundante.

15.- Del Honorable Senador señor Insulza, para intercalar, entre las expresiones “constituido por” y “tres personas”, lo siguiente: “el Ministro o Ministra Secretario(a) General de la Presidencia, el Auditor o la Auditora General de Gobierno y”.

Observaciones:

Esta indicación sería inadmisibles, pero más allá de lo formal, no resulta consistente con el objetivo del proyecto, que busca dar mayor autonomía a las entidades que son parte del SAIG.

En este sentido, con la indicación se estaría dando al Consejo Consultivo una estructura similar a la que actualmente tiene el CAIGG, siendo que justamente el proyecto busca cambiar y modernizar la institucionalidad asociada a las auditorías internas de Gobierno, de conformidad a recomendaciones internacionales.

16.- Del Honorable Senador señor Insulza, para suprimir la frase “, uno de las cuales será designada por el Presidente de la República como el Presidente o la Presidenta del Consejo”.

Observaciones:

Esta indicación está vinculada a las indicaciones 15 y 17 que son inadmisibles.

17.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, a continuación de la expresión “ley N° 19.882”, lo siguiente: “. Presidirá el Consejo, el Ministro o Ministra Secretario(a) General de la Presidencia”.

Observaciones:

Esta indicación sería inadmisibles, pero más allá de lo formal, no resulta consistente con el objetivo del proyecto, que busca dar mayor autonomía a las entidades que son parte del SAIG.

18.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Todo lo anterior, teniendo siempre presente la obligación de denunciar los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de la función pública.”.

19.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, quienes integren el Consejo deberán denunciar, con la debida prontitud, ante el Ministerio Público, las policías, o ante cualquier tribunal con competencia criminal, los hechos de los que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y que revistan caracteres de delito. Del mismo modo, deberán denunciar ante la autoridad competente los hechos de que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistan el carácter de faltas administrativas o infracciones disciplinarias, especialmente aquellas que contravengan el principio de probidad administrativa.”.

Observaciones:

Las indicaciones 18 y 19 van en el mismo sentido y son adecuadas ya que refuerzan el deber de denunciar los delitos e infracciones de las que puedan tomar conocimiento los consejeros en el ejercicio de sus funciones, considerando que en virtud de la estructura que tiene el Consejo Consultivo podrían quedar fuera de la norma que se aplica a los funcionarios públicos sobre esta materia.

20.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra “determine” y el punto final, la siguiente frase: “, sin perjuicio de los documentos que sean reservados en conformidad a las normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República”.

Observaciones:

La indicación apuntaría a resguardar aquellos documentos que estén dentro de la clasificación de reservado en cuanto a la transferencia de información que deberán cumplir los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna que el SAIG les requiera cuando la estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

21.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar, después del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 de la presente ley.”.

Observaciones:

La indicación propone una precisión necesaria para dar consistencia a las normas que buscan facilitar la coordinación con la Contraloría y la dependencia técnica que ella ejerce sobre los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría.

-----O-----

En cuanto al segundo paquete de indicaciones presentadas, este surgió como respuesta al debate que se dio en la misma Comisión de Hacienda respecto al Consejo Consultivo que se crea en la ley y se compuso de las siguientes propuestas:

1H.- De Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, para eliminar la oración final “Durante la elaboración de la Política deberá considerar la opinión del Consejo Consultivo de Auditoría Interna, señalado en el artículo 12.”.

2H.- De Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, para reemplazar en el artículo 7 inciso primero letra c) la frase “para lo cual deberá previamente escuchar la opinión del Consejo Consultivo de Auditoría Interna”, por la siguiente: “para lo cual podrá solicitar la opinión a expertos en materia de auditoría interna, gobernanza, control interno y/o gestión de riesgos”.

3H.- De Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, para suprimir la artículo 11 Letra h)

4H.- De Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, para eliminar el Párrafo 4° Del Consejo Consultivo de Auditoría Interna, readecuándose el orden correlativo de los párrafos y artículos siguientes.

5H.- De Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, para suprimir el artículo quinto transitorio readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes.

6H.- De Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, para reemplazar en el artículo sexto transitorio la frase “la constitución del Consejo señalado en el artículo 12”, por la siguiente: “la iniciación de actividades del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, determinada de acuerdo a lo señalado en el artículo primero transitorio”.

Observaciones:

Frente al análisis de la pertinencia de contar con este Consejo, así como respecto a la composición, la dieta, las funciones, la periodicidad de las sesiones y las normas relativas a incompatibilidades e inhabilidades, se hizo patente que el Consejo tal como estaba planteado en el proyecto podría no tener mayor sustento y viabilidad.

En efecto, la naturaleza consultiva que tiene el órgano en conjunto con los límites de sesiones y de incompatibilidades e inhabilidades constituían pocos incentivos a que personas con alta experiencia efectivamente tuvieran interés de aportar sus conocimientos si esto implicaría restricciones a su ejercicio profesional o laboral desproporcionadas.

El Ejecutivo optó por presentar indicaciones que en definitiva eliminan la creación del Consejo Consultivo, estableciendo en su reemplazo una norma para que el SAIG tuviera entre sus facultades la de solicitar la opinión a expertos en materia de auditoría interna, gobernanza, control interno y/o gestión de riesgos para la elaboración de la propuesta la Política de Auditoría Interna de Gobierno.

La alternativa de eliminar el Consejo, en vez de una reestructuración de la propuesta para su creación, resulta adecuada ya que para los requerimientos de consultoría que efectivamente podría requerir el SAIG y la naturaleza que se quiere darle a esta materia no resultaba necesario establecer una entidad específica.